



CSJ 2193/2017

ORIGINARIO

Petroquímica Cuyo S.A.I.C. c/ Córdoba,
Provincia de s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 7 de Marzo de 2023

Vistos los autos: "Petroquímica Cuyo S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", de los que

Resulta:

I) A fs. 33/46 se presenta Petroquímica Cuyo S.A.I.C. e inicia acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se despeje el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión de la demandada de aplicarle -con sustento en lo dispuesto en el artículo 18 de la ley impositiva local 10.412, correspondiente al año 2017- una alícuota diferencial más gravosa en relación al impuesto sobre los ingresos brutos, por el hecho de no tener su planta industrial en la jurisdicción provincial.

Solicita que el Tribunal se pronuncie sobre la validez constitucional de la citada ley por entender que viola de manera directa los artículos 9°, 10, 11, 16, 75, inciso 13, y concordantes, de la Constitución Nacional.

Expone que es una empresa que se dedica a la "fabricación de materias plásticas en formas primarias", cuya planta industrial se encuentra ubicada fuera de la Provincia de Córdoba. Añade que, en virtud de los fallos dictados por este Tribunal, desde julio de 2017 tributa el impuesto a la alícuota del 0,50%.

Alega que el 30 de agosto de 2017, la Dirección General de Rentas provincial la intimó a rectificar las declaraciones juradas e ingresar el pago de las diferencias resultantes, por no tener establecimiento industrial en la Provincia de Córdoba (fs. 31).

Sostiene que la legislación provincial cuestionada ha instaurado una política discriminatoria contraria a la Constitución Nacional, pues mientras quienes desarrollan actividades industriales análogas a Petroquímica Cuyo S.A.I.C. en territorio cordobés tributan el impuesto sobre los ingresos brutos aplicando -a tenor del artículo 18 de la ley provincial 10.412- una alícuota del 0,50%, los contribuyentes que, como en su caso, no desarrollen su actividad industrial en establecimientos ubicados en la Provincia de Córdoba, están obligados a aplicar la alícuota del 4,75%.

Finalmente, requiere el dictado de una medida cautelar, en los términos del artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, por la que: (i) se suspenda a su respecto la vigencia del régimen de alícuotas previsto para el impuesto sobre los ingresos brutos en la norma que aquí cuestiona, de modo tal que se la habilite a ingresar el gravamen aplicando la alícuota del 0,5%, prevista en el artículo 13 de la ley provincial 10.412 y; (ii) se le impida a la Provincia de Córdoba aplicar y ejecutar multas o trabar cualquier medida



CSJ 2193/2017

ORIGINARIO

Petroquímica Cuyo S.A.I.C. c/ Córdoba,
Provincia de s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

administrativa o judicial sobre su patrimonio y el de sus directores.

Por último, desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia de la acción declarativa.

II) A fs. 49 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 65/66 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa e hizo lugar a la medida cautelar solicitada.

III) A fs. 76/106 vta. la Provincia de Córdoba contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, reproduce los artículos 18 de la ley impositiva provincial 10.412 y 215, inciso 23, del Código Tributario (t.o. por el decreto 400/2015).

Destaca -entre otras consideraciones- que el beneficio fiscal está condicionado a que la industria se encuentre radicada en la Provincia de Córdoba, y que el objetivo de la medida en cuestión debe entenderse como una política de promoción y fomento enmarcada en la potestad tributaria provincial de promover la industria local y estimular su desarrollo, reservada para sí a través del artículo 125 de la Constitución Nacional, en la búsqueda de concretar la llamada cláusula del progreso o desarrollo al que se refiere el artículo 75, inciso 18, de la Ley Fundamental.

Hace consideraciones sobre el hecho imponible y su regulación en el código tributario provincial, y alega que la actora "confunde la actividad principal realizada desde el punto de vista económico, y el cual hace a su objeto social, con las actividades efectivamente realizadas en cada ámbito jurisdiccional tendientes al cumplimiento de su objeto, y que configuran el aspecto material de los hechos imposables acaecidos dentro de dichas jurisdicciones" (fs. 86).

Niega que se verifique la discriminación denunciada por el contribuyente, pues la provincia únicamente considera -a los fines de ese tributo- la actividad efectivamente desarrollada en su territorio, que no es la industrial en este caso.

Por el contrario, aduce que Petroquímica Cuyo S.A.I.C. realiza en la Provincia de Córdoba "actividades de comercialización", en los términos del artículo 178, inciso d, del código tributario provincial; por lo que "se encuentra alcanzada a la misma alícuota para quienes ejecuten idéntica actividad". Sostener lo contrario, dice, "importaría que cualquier tributo que grave separadamente la fabricación/industrialización y la comercialización, en el caso de sujetos pasivos que ejerzan esas actividades en más de una jurisdicción, que comercien interprovincialmente serían tachados de inconstitucionales", e implicaría "hacer prácticamente imposible el ejercicio de la autonomía de las provincias" (fs. 103 vta.).



CSJ 2193/2017

ORIGINARIO

Petroquímica Cuyo S.A.I.C. c/ Córdoba,
Provincia de s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

IV) A fs. 204 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza".

Considerando:

1º) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 65/66, esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley impositiva local 10.412, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona. En efecto, de la prueba documental agregada a la causa (fs. 31), se desprende que la actividad desplegada por la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación

jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, entre otros).

En consecuencia, es dable concluir que se han reunido los recaudos exigidos por el artículo 322 del código de rito, para la admisibilidad de la acción declarativa.

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480, y en las causas CSJ 1278/2017 "Outokumpu Fortinox S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza" y CSJ 1/2016 "Caviglio Comercial S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa (art. 322 del Código Procesal)", sentencias del 17 de febrero de 2022; CSJ 1102/2016 "Kiskali S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 24 de febrero de 2022 y CSJ 1853/2016 "Monsanto Argentina S.R.L. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 3 de marzo de 2022, entre otras, a cuyos fundamentos y conclusiones allí expuestos corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de la ley impositiva provincial que se cuestiona, en el caso concreto, al gravar a la actora la actividad ya referida en el resultando I, 3° párrafo, con la alícuota del 4% o 4,75% o la establecida "para el comercio mayorista si ésta resultare inferior",



CSJ 2193/2017

ORIGINARIO

Petroquímica Cuyo S.A.I.C. c/ Córdoba,
Provincia de s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en la presente causa queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Ley Fundamental (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480, entre otros).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Petroquímica Cuyo S.A.I.C. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 10.412 de la Provincia de Córdoba, como así también de la pretensión fiscal fundada en dicha normativa (formulario de notificación F-904 del 30 de agosto de 2017, fs. 31). Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.

Parte actora: **Petroquímica Cuyo S.A.I.C.**, representada por los **Dres. Hugo Calluzo y Edgardo Oscar Ponsetti**.

Parte demandada: **Provincia de Córdoba**, representada por los **Dres. Leticia V. Aguirre, Sonia L. Trinidad y Gustavo Daniel Laucirica**, con el patrocinio letrado de la **Dra. Julia Enriquez**.